



Valledupar, Trece (13) de octubre del dos mil veintitrés (2023).

Referencia: ACCION DE TUTELA.

Accionante: AMALIA ROSA FUENTES DIAZ

Accionado: CAJACOPI EPS

Vinculada: SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CESAR

Rad. 20001-41-89-002-2023-00514-00

Providencia: FALLO DE TUTELA

Procede el Juzgado a dictar el fallo correspondiente en la acción de tutela referenciada. En la cual se relacionan los siguientes:

I. HECHOS:

- Manifiesta la accionante quien se encuentra afiliada a Cajacopi EPS, que el médico tratante en gastroenterología ordeno el tratamiento PANTOPRAZOL 40mg capsula dura cantidad 30. Y BROMURO DE PINAVERIO 100mg + DIMETICONA 300mg capsula blanda cantidad 60.
- Indica que ha solicitado de manera reiterada la autorización de los medicamentos, lo que genera una demora en su suministro, por lo que considera se le esta causando un perjuicio, debido a que no ha recibido la entrega del medicamento BROMURO DE PINAVERIO 100mg + DIMETICONA 300mg capsula blanda cantidad 60, en la formula ordenada por el médico tratante.

II. ACTUACIÓN PROCESAL:

Por venir en forma legal la demanda de tutela fue admitida mediante auto de fecha cuatro (04) de octubre de dos mil veintitrés (2023), notificándose a las partes sobre su admisión, y solicitando respuesta de los hechos presentados por el accionante a la parte accionada.

III. CONTESTACION DE LA PARTE¹

La parte accionada **CAJACOPI EPS**, contesto la presente demanda de la siguiente manera:

Señalo que de acuerdo a lo solicitado por la accionante se generó autorización de servicios N° 2000101176903 SERVICIO FARMACEUTICO - BROMURO DE PINAVERIO 100MG + DIMETICONA 300MG CAPSULA BLANDA / PANTOPRAZOL 40MG TABLETA RECUBIERTA a nombre de FUENTES DIAZ AMALIA ROSA, de fecha 03/10/2023, a entregar por parte de LOGIFARMA S.A.S. ubicado en el Centro Comercial MEGAMALL.

Mediante certificación de entrega expedido por LOGIFARMA S.A.S. queda constancia que el medicamento IBERZARTAN de 150 mg fue entregado el día 20 de septiembre de 2023 a las 8:19 am a la señora AMALIA ROSA FUENTES DIAZ.

Así mismo CAJACOPI EPS S.A.S indico que los medicamentos AMLODIPINO DE 5 MG, CARVEDIDOL DE 6.25 MG, TRAZODONACLORIDO 50 MG y METFORMINA DE 850 MG deben ser reclamados directamente por la usuaria en LOGIFARMA S.A.S., debido a que estos no requieren autorización, lo cual fue debidamente notificado a la accionante, por lo que solicitan se declare un hecho superado.

La entidad vinculada **SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR**, quien fue debidamente notificada no contesto.

¹ Texto tomado textualmente de la contestación de la accionada.



IV. PRETENSIONES:²

Con fundamento en los hechos relacionados, solicito dña señora Juez disponer y ordenar a la parte accionada y a favor mío, la siguiente pretensión:

1. Tutelar mi derecho fundamental a LA VIDA, LA SALUD, LA AUTORIZACIÓN DE MEDICAMENTOS DE CONTROL SIN DILATACIONES NI RETARDOS INJUSTIFICADOS, y todos los que resultaren por conexidad.
2. Ordenan a la accionada CAJACOPI EPS VALLEDUPAR - CESAR, que en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas me hagan entrega de la formula completa, incluyendo la primera entrega (agosto), segunda entrega (septiembre9, y tercera entrega (octubre). Para poder realizar mi tratamiento completo como me lo mando el médico.
3. Que se ordene a la accionada CAJACOPI EPS VALLEDUPAR - CESAR, que, una vez radicada las solicitudes de autorización, me sean entregado los medicamentos de cada tratamiento que tengo sin más retardos ni demoras injustificadas.

V. DERECHO FUNDAMENTAL TUTELADO:

El accionante considera que, con los anteriores hechos se está vulnerando el derecho fundamental a la salud, dignidad humana entre otros.

VI. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

La Constitución de 1991 consagró, en el artículo 86, la acción de tutela como un mecanismo creado para la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas que por alguna acción u omisión de una autoridad pública o de los particulares, son amenazados o, de hecho, vulnerados.

6.1. Competencia del Juez para la resolución del presente conflicto jurídico - constitucional:

Además de las normas citadas en el encabezamiento de esta providencia acerca de la facultad en cabeza de los Jueces de la República para conocer de este tipo de conflicto jurídico-constitucional, el Decreto 1382 de 2000, estableció las reglas para el reparto de la Acción de Tutela. Al manifestar la Corte Constitucional que todos los jueces son competentes para conocer de Tutelas, este Despacho es competente para conocer de ella, en consecuencia, entrará a estudiar si en efecto se han vulnerado los derechos cuya protección reclama la accionante.

6.2. Legitimación por activa. Conforme al artículo 86 de la Carta, toda persona podrá presentar acción de tutela ante los jueces para procurar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular. Por su parte, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, regula la legitimación para el ejercicio de la acción de tutela. La norma en cita establece que la solicitud de amparo puede ser presentada: i) a nombre propio; ii) a través de representante legal; iii) por medio de apoderado judicial; o iv) mediante agente oficioso.

En el caso objeto de estudio se observa que la señora AMALIA ROSA FUENTE DIAZ, que actúa en nombre propio, es la persona directamente afectada, ante la presunta vulneración de su derecho fundamental a la salud, a la vida, dignidad humana, entre otros, por lo que se en conjunto estas dos circunstancias hacen concluir que el requisito de legitimación por activa se encuentra satisfecho de buena manera.

6.3. Legitimación por pasiva. La legitimación en la causa por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal de quien es el destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho

² Tomado textualmente de la demanda.



fundamental, una vez se acredite la misma en el proceso. Conforme a los artículos 86 de la Constitución y 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y contra particulares.

En el asunto de la referencia, la acción de tutela se dirige contra CAJACOPI EPS, quien es la entidad, a la cual se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales a la Salud, la vida entre otros, lo cual deriva en ostentar la capacidad para ser sujeto pasivo de la presente acción constitucional.

6.4. Derecho a la salud como derecho fundamental. Reiteración de jurisprudencia:

El artículo 49 de la Constitución consagra la salud como un servicio público a cargo del Estado, el cual debe garantizar “a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”; es así como, desde este criterio de universalidad, debe abordarse el estudio del carácter fundamental de este derecho, “en dos pilares armónicos y complementarios, éstos son, el carácter autónomo e independiente que abarca este derecho en sí mismo y en la conexidad que posee con otros derechos de rango fundamental”³

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 12 menciona la relación de dependencia que tiene el derecho a la salud con la dignidad del hombre, estableciendo que todas las personas tienen derecho “al disfrute del más alto nivel de salud física y mental”; en consecuencia, establece que los Estados parte, para llevar a cabo la plena realización de este derecho, deben adoptar medidas tales como: “La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.

La Corte Constitucional ha reiterado el carácter fundamental y autónomo del derecho a la salud, en la medida en que: “(...) la implementación práctica de los derechos constitucionales fundamentales siempre dependerá de una mayor o menor erogación presupuestaria, de forma tal, que despojar a los derechos prestacionales – como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al acceso al agua potable entre otros - de su carácter de derechos fundamentales resultaría no sólo confuso sino contradictorio. Al respecto, se dice, debe repararse en que todos los derechos constitucionales fundamentales – con independencia de si son civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de medio ambiente - poseen un matiz prestacional de modo que, si se adopta esta tesis, de ninguno de los derechos, ni siquiera del derecho a la vida, se podría predicar la fundamentalidad. Restarles el carácter de derechos fundamentales a los derechos prestacionales, no armoniza, por lo demás, con las exigencias derivadas de los pactos internacionales sobre derechos humanos mediante los cuales se ha logrado superar esta diferenciación artificial que hoy resulta obsoleta así sea explicable desde una perspectiva histórica.”

Cuando se trata de sujetos de especial protección deviene la irreductible exigencia de una protección constitucional en una dimensión reforzada, debido a que el Estado debe velar por garantizar la mejor prestación posible de este servicio, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad que rigen el Sistema General de Seguridad Social de Salud, permitiéndose acudir ante el juez constitucional, de manera directa, cuando tal derecho se encuentre conculcado o amenazado.⁴

6.5. De los servicios en salud ordenados por el médico tratante:

La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que el médico tratante, es decir, aquel facultativo adscrito a la EPS del accionante es el profesional de la salud del cual deben provenir las órdenes de servicios de salud requeridos. Así, para la mencionada Corporación no resultan

³ T-360 de 2010.

⁴ T-360 de 2010.



amparables, en principio, las solicitudes de protección del derecho fundamental a la salud que se refieran a servicios prescritos por un médico que no está adscrito a la EPS del peticionario.

A pesar de lo expuesto, también ha reconocido en algunos casos que las ordenes medicas provienes de un facultativo particular, no adscrito a la EPS del reclamante, pueden llegar a tener valor, como lo sustentó en la sentencia T-760 de 2008 la Honorable Corte Constitucional: "... el concepto de un médico que trata a una persona, puede llegar a obligar a una entidad de salud a la cual no se encuentre adscrito, si la entidad tiene noticia de dicha opinión médica, y no la descartó con base en información científica, teniendo la historia clínica particular de la persona, bien sea porque se valoró inadecuadamente a la persona o porque ni siquiera ha sido sometido a consideración de los especialistas que sí están adscritos a la entidad de salud en cuestión. En tales casos, el concepto médico externo vincula a la EPS, obligándola a confirmarlo, descartarlo o modificarlo, con base en consideraciones de carácter técnico, adoptadas en el contexto del caso en concreto."

En consecuencia, una EPS desconoce el derecho fundamental a la salud de una persona cuando, a pesar del carácter urgente del servicio ordenado por el médico, se abstiene de prestarlo.

VII. PROBLEMA JURIDICO

El problema jurídico a resolver en el asunto puesto bajo escrutinio de esta judicatura, consiste en determinar si la entidad accionada, está vulnerando o ha vulnerado los derechos fundamentales de la señora AMALIA ROSA FUENTE DIAZ, al no autorizar los medicamentos ordenados por el médico tratante.

VIII. CASO EN CONCRETO

Se extrae de la demanda de tutela y de las pruebas allegas al expediente que la señora AMALIA ROSA FUENTE DIAZ se encuentra afiliado a CAJACOPI EPS bajo el régimen subsidiado, quien acude a través del mecanismo constitucional de la acción de tutela con la finalidad que le autoricen los medicamentos ordenados por su médico tratante.

En consecuencia, se le corrió traslado a la entidad accionada CAJACOPI EPS quienes en su contestación acreditaron la autorización de servicios N° 2000101176903 SERVICIO FARMACEUTICO - BROMURO DE PINAVERIO 100MG + DIMETICONA 300MG CAPSULA BLANDA / PANTOPRAZOL 40MG TABLETA RECUBIERTA a nombre de FUENTES DIAZ AMALIA ROSA, de fecha 03/10/2023, a entregar por parte de LOGIFARMA S.A.S. ubicado en el Centro Comercial MEGAMALL, tal como se observa a continuación:

 CAJACOPI EPS Cuida de ti Nit. 901.543.211-6 Calle 19 No. 11 - 43 5715390 VALLEDUPAR		Autorización de Servicios Número 2000101176903	
Beneficiario Nombre: FUENTES DIAZ AMALIA ROSA Identificación: CC 49735480 Sede Afiliado: VALLEDUPAR Dirección: MZ 2 CA 14 Telefonos: 5850216 - 3203467346		SERVICIO FARMACEUTICO Sexo: F Fecha Afiliación: 10/08/2021 Contrato Admin: 12 Correo: Pier7345@hotmail.com Fecha: 03/10/2023 Nacimiento: 01/03/1956 Régimen: SUBSIDIADO Modalidad: 12 Vence: 02/11/2023 Diagnostico: K293 - K589 Nivel: 1 Estado AF: ACTIVO	
Reng	Codigo	Servicio	Cantidad
1	20028750-1	BROMURO DE PINAVERIO 100MG + DIMETICONA 300MG CAPSULA BLANDA	60
2	20079038-1	PANTOPRAZOL 40MG TABLETA RECUBIERTA	30
Medico Tratante: JOSE FERNANDEZ			
Numero	Fecha 27/09/2023	Ubic. paciente Consulta Externa	Servicio/cama
Imputable a: Administradora		ESTE VALOR DE AUTORIZACION ESTA SUJETO A AUDITORIA MEDICA	
MIPRES: 0			
Prestador Identificación: 900073223 Nombre: LOGIFARMA S.A.S. Dirección: CALLE 15 # 11A - 56 LOCAL 102 Telefono: NEYFI DEL RIO - 3168273181 Ciudad: VALLEDUPAR		Recibo a Satisfacción _____ Firma del Usuario	
Fecha de impresión: 06/10/2023 11:05 GENESIS		Autorizado por: OCHOA ZAPATA JOSE GREGORIO	 www.cajacopieps.com





Mediante certificación de entrega expedido por LOGIFARMA S.A.S. queda constancia que el medicamento IBERZARTAN de 150 mg fue entregado el día 20 de septiembre de 2023 a las 8:19 am a la señora AMALIA ROSA FUENTES DIAZ.

Lo anterior, demuestra que, durante el transcurso de la presente acción, la accionada hizo cesar las causas que dieron origen a la presente demanda de tutela. Respecto a la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte Constitucional se pronunció en Sentencia T- 021 del 20 de febrero de 2017, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, y ha señalado que esta se presenta en la acción de tutela cuando frente a la solicitud de amparo de la actora, la orden del Juez de tutela carece de efectos, precisando que la misma acontece cuando se está ante un daño consumado o ante un hecho superado.

En esa sentencia textualmente dijo el máximo tribunal constitucional:

“La jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la carencia actual de objeto sobreviene cuando frente a la petición de amparo la orden del juez de tutela no tendría efecto alguno o caería en el vacío. Al respecto se ha establecido que esta figura procesal, por regla general, se presenta en aquellos casos en que tiene lugar un daño consumado o un hecho superado.

En cuanto al daño consumado, la jurisprudencia ha admitido que el mismo tiene ocurrencia cuando la amenaza o la transgresión del derecho fundamental ya ha generado el perjuicio que se pretendía evitar con el mecanismo preferente de la tutela, de manera que resulta inocuo para el juez impartir una orden en cualquier sentido. Así las cosas, el daño consumado supone que no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete un peligro y, por ello, tan sólo es procedente el resarcimiento del daño originado por la violación del derecho. En este escenario, esto es, con el fin de obtener una reparación económica, entiende la Corte que la acción de tutela resulta—por regla general— improcedente, pues su naturaleza es eminentemente preventiva y no indemnizatoria. De manera que, en relación con este fenómeno, los jueces de instancia y la propia Corte deben declarar la improcedencia de la acción, a menos que —bajo ciertas circunstancias— se imponga la necesidad de pronunciarse de fondo por la proyección que pueda tener un asunto, en virtud de lo previsto en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, o por la necesidad de disponer correctivos frente a personas que puedan estar en la misma situación o que requieran de especial protección constitucional.

Por su parte, el hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional.

En este supuesto, no es perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de los derechos cuya protección se demanda, salvo “si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”.

Precisamente, en la Sentencia T-045 de 2008, se establecieron los siguientes criterios para determinar si en un caso concreto se está o no en presencia de uno de tales hechos, a saber:

“1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.

2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.



3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado.”

Vistas las anteriores consideraciones, es evidente que en el asunto en estudio se presente la carencia actual de objeto por hecho superado, ya que CAJACOPI EPS, la entrega del medicamento ordenado por el médico tratante de ahí que la acción de tutela pierda su razón de ser en este caso concreto, pues la orden que pudiera impartir el juez de tutela no tendría ningún efecto práctico al haberse superado la situación de hecho que produjo que la tutelante, incoara el resguardo constitucional, es decir, el motivo que generó la acción ya desapareció.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Segundo De Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Valledupar, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR, la presente acción de tutela instaurada por **AMALIA ROSA FUENTE DIAZ** en contra de **CAJACOPI EPS** por ser un **HECHO SUPERADO**, según las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Notifíquese este fallo por secretaria, o por el medio más eficaz (oficio o telegrama).

TERCERO: En caso de ser impugnado el presente fallo, envíese por secretaria a la oficina judicial para que se surta el reparto correspondiente, en caso de no serlo, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

El Juez,


JOSSUE ABDON SIERRA GARCÉS
JUEZ



Valledupar, Trece (13) de octubre del dos mil veintitrés (2023).

Oficio No. 2471

Señores:

AMALIA ROSA FUENTE DIAZ

Dirección de correo electrónico:

CAJACOPI EPS

Dirección de correo electrónico:

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR

Dirección de correo electrónico:

Referencia: ACCION DE TUTELA.

Accionante: AMALIA ROSA FUENTES DIAZ

Accionado: CAJACOPI EPS

Vinculada: SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CESAR

Rad. 20001-41-89-002-2023-00514-00

Providencia: FALLO DE TUTELA

NOTIFICOLE FALLO DE TUTELA DE FECHA TRECE (13) DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTITRES (2023) QUE EN PARTE RESOLUTIVA DICE **PRIMERO: NEGAR**, la presente acción de tutela instaurada por **AMALIA ROSA FUENTE DIAZ** en contra de **CAJACOPI EPS** por ser un **HECHO SUPERADO**, según las razones expuestas en la parte motiva. **SEGUNDO:** Notifíquese este fallo por secretaria, o por el medio más eficaz (oficio o telegrama). **TERCERO:** En caso de ser impugnado el presente fallo, envíese por secretaria a la oficina judicial para que se surta el reparto correspondiente, en caso de no serlo, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. El Juez *fd* JOSSUE ABDON SIERRA GARCES.

Atentamente,

ESTEFANIA VILLAMIZAR LARRAZABAL
Secretaria